Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **07559/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **una persona usuario que no proporcionó nombre o seudónimo,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **01337/INFOEM/IP/2024,** por parte del **Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **catorce de noviembre de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual requirió la información siguiente:

*“Documentos relacionados de la venta de vehículos institucionales Precio de venta de cada vehículo Nombre de los compradores o adjudicados Fichas de despisitp del pago de cada unidad.****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** A través del SAIMEX.

**2. Respuesta.** El **seis de diciembre de dos mil veinticuatro**, el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“Con fundamento en el artículo 53 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se adjunta la respuesta a su solicitud de información pública.” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

***“03ResumenRespuesta01337.pdf”:*** Contiene el documento identificado como “*RESUMEN DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA”*

***“RespuestaSolicitud01337.2024.zip”:***  Carpeta comprimida integrada por los documentos descritos en el siguiente orden:

* ***“Anexo1Solicitud01337\_2024”:*** Se trata del Acta de la Sesión Extraordinaria número INFOEM/DGAF/CAAIE/EXT-006/2024 del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, de fecha seis de octubre del año dos mil veinticuatro, en la que se aprueba por mayoría de votos el costo que tendrán los vehículos marca Honda Accord 2014 y la Ford Expedition para el procedimiento de adjudicación directa derivados de las partidas desiertas de la subasta pública número **INFOEM/DGAF/´PAE-001/2024** referente al parque vehicular.

Asimismo, contiene el fallo del procedimiento administrativo de enajenación de bienes mediante adjudicación directa número INFOEM/AD-001/2024 de fecha veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, suscrito y firmado por el Director General de Administración y Finanzas y Presidente del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.

Documento remitido en versión pública en el que se advierten clasificados los nombres de los participantes; así como, de las personas a las que fueron adjudicados los vehículos.

* ***“Anexo2Solicitud01337\_2024”:*** En su contenido se advierte el cuadro de clasificación en el que se describe como información confidencial el nombre de particulares contenidos en las actas.
* ***“Anexo3Solicitud01337\_2024”:*** Archivo integrado por la versión pública de dos fichas de depósito y dos transferencias.
* ***“Anexo4Solicitud01337\_2024”:*** Se trata del cuadro de clasificación en el que se describe como información confidencial los datos patrimoniales y RFC contenidos en los comprobantes de pago.
* ***“RES-18-INFOEM-ORD-COMT-23a-2024”:*** Acta del Comité de Transparencia RES/18/INFOEM/ORD/COM/23°/2024 de fecha tres de diciembre de dos mil veinticuatro en el que se aprueba la propuesta de clasificación como información confidencial del nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y datos patrimoniales de las personas a quienes se vendieron los bienes, presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas de este Instituto.
* ***“RespuestaSolicitud01337-2024”:*** Oficio número INFOEM/DGAF/892/2024 de fecha tres de diciembre de dos mil veinticuatro, suscrito y signado por el Director General de Administración y Finanzas por medio del cual respondió a la solicitud de información y remitió la información requerida por la persona solicitante.
* ***“RespuestaSolicitud1337UT2024”:*** Oficio número INFOEM/UT/1057/2024 de fecha seis de diciembre de dos mil veinticuatro, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia por medio del cual da respuesta a la solicitud de información número **01337/INFOEM/IP/2024.**

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **nueve de diciembre de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“el nombre de la persona a la que se adjudicaron los autos honda es publico no sean opacos.” (sic)*

**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

*“el nombre de la persona a la que se adjudicaron los autos honda es publico no sean opacos.” (sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **doce de diciembre de dos mil veinticuatro,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. De constancias del expediente electrónico del SAIMEX, se observa que el trece de enero de dos mil veinticinco el **Sujeto Obligado** remitió el archivo electrónico identificado como  *“InformeJustificadoRecursodeRevision07559\_2024.pdf”* en el que se advierte el memorándum número INFOEM/DGAF/481/2024 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director General de Administración y Finanzas en el que en su parte medular, ratifica la respuesta a la solicitud de información.

Por otro lado, la parte **Recurrente** fue omisa en hacer valer manifestaciones o rendir alegatos que conforme a derecho resultaran procedentes.

**7. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **veintinueve de enero de dos mil veinticinco**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **seis de diciembre de dos mil veinticuatro**,mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, se tuvo por presentado el día **nueve de diciembre de dos mil veinticuatro**, esto es al primer día hábil posterior a aquel en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Por otro lado, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, es de suma importancia señalar que **la parte** **Recurrente**,no proporcionó nombre o seudónimo con el que desea que se le identifique**,** como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante lo anterior, no proporcionar el nombre no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes*** *anónimas, con* ***nombre incompleto o seudónimo******serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."(Énfasis añadido)*

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad de los recursos de revisión, una vez realizado el análisis de los formatos de interposición de los recursos, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fueron presentados mediante el formato visible en el SAIMEX.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracciones II del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

*...*

***II.*** *La clasificación de la información;*

***.****..*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…” (Sic)*

Es aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado,** de la venta de vehículos institucionaleslo siguiente:

1. Precio de venta de cada vehículo;
2. Nombre de los compradores o adjudicados, y,
3. Fichas del pago de cada unidad

En respuesta, el **Sujeto Obligado**, por conducto de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de la persona solicitante el pronunciamiento emitido por el Director General de Administración y Finanzas, quien remitió el Acta de la Sesión Extraordinaria número INFOEM/DGAF/CAAIE/EXT-006/2024 del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en la que se aprueba el costo de los vehículos marca Honda Accord 2014 y la Ford Expedition para el procedimiento de adjudicación directa derivados de las partidas desiertas de la subasta pública número **INFOEM/DGAF/PAE-001/2024** referente al parque vehicular; asimismo remitió el fallo del procedimiento administrativo de enajenación de bienes mediante adjudicación directa y las fichas de depósito y transferencias en versión pública.

No obstante, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión que se resuelve, en el que manifestó su inconformidad respecto a la clasificación del nombre de las personas a las que se adjudicaron los autos honda, señalando que el mismo es público.

Es de señalar que de la lectura del motivo de inconformidad de la parte **Recurrente,** no se advierte que este no verse sobre la totalidad de la información proporcionada por el **Sujeto Obligado**, ya que no manifestó agravios respecto de la documentación remitida en la que consta el precio de venta de cada vehículo ni de las fichas de depósito del pago de cada unidad, únicamente se inconformó por la clasificación del nombre de la o las personas que compraron o se les adjudicó el bien; por tanto, esta parte de la respuesta, al no haber sido impugnada, debe declararse consentida, ya que al no haber realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto, pues en el caso concreto se infiere que la información proporcionada, satisface la solicitud presentada respecto de los requerimientos que no fueron combatidos.

Lo anterior es así, debido a que cuando la parte **Recurrente** impugna la respuesta del **Sujeto Obligado**, y este no expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma.

Sirve de sustento lo plasmado en el Criterio de interpretación con clave de control SO/001/2020, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto, lo siguiente:

*“****Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.*** *Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.”*

Asimismo, resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

En consecuencia, se insiste, ante la falta de impugnación eficaz, la respuesta entregada debe declararse consentida por la persona solicitante, y, por consiguiente, no es procedente el análisis de fondo en la resolución.

Durante el periodo de manifestaciones el **Sujeto Obligado** remitió el archivo electrónico identificado como *“InformeJustificadoRecursodeRevision07559\_2024.pdf”* en el que se advierte el memorándum número INFOEM/DGAF/481/2024 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director General de Administración de Finanzas quien en lo medular ratifica la respuesta a la solicitud de información.

Por otro lado, la parte **Recurrente** omitió hacer valer manifestaciones o rendir alegatos que conforme a derecho resultaran procedentes, por lo tanto, se tiene por precluido su derecho.

Acotado lo anterior, es de señalar que derivado del análisis de las constancias que obran en el expediente electrónico en el que se actúa, se advirtió que la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**, turnó la solicitud al servidor público habilitado de la Dirección General de Administración y Finanzas, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo, fracciones XV y XVIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, entre otras funciones se le atribuyen las siguientes:

*“****Artículo 26.*** *Corresponde a la* ***Dirección General de Administración y Finanzas*** *ejercer las atribuciones siguientes:*

*…*

*XV.* ***Formular el programa anual de adquisiciones****, de acuerdo con las necesidades operativas, someterlo a consideración del Pleno para su aprobación y coordinar las adquisiciones de bienes y servicios a solicitud de las Unidades Administrativas a través de los procedimientos que establezca la normatividad correspondiente; además del programa anual de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y* ***enajenaciones****;*

*…*

*XVIII. Resguardar, registrar y controlar el patrimonio del Instituto asignado a las Unidades Administrativas, su mantenimiento y conservación;*

*…”*

Asimismo, el Manual General de Organización del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, establece como funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, las siguientes:

***“4092090000 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA***

***OBJETIVO:*** *Planear, dirigir, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con la administración y el control del capital humano, de los recursos materiales, financieros y técnicos, así como la prestación de los servicios generales del Instituto; con base en los lineamientos, políticas y estrategias establecidas que coadyuven con las diferentes Unidades Administrativas del Instituto, en el cumplimiento de las metas y programas.*

***FUNCIONES:***

*…*

*-* ***Dirigir y supervisar la integración y ejecución*** *del programa anual de adquisición de bienes y contratación de servicios, del comité de arrendamientos, adquisición de inmuebles y enajenaciones; someterlos a consideración del comité correspondiente y del Pleno, así como vigilar su cumplimiento;*

*…*

*-* ***Realizar las funciones de Presidenta o Presidente en los Comités de Adquisiciones y Servicios y el de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Instituto****; para dar cumplimiento a la normatividad establecida en la materia;*

*…”*

En este sentido, tomando como referencia los preceptos normativos previamente transcritos, se tiene que el Director General de Administración y Finanzas de este Instituto, además de contar con atribuciones para formular el programa anual de arrendamientos, adquisiciones y enajenaciones, es el servidor público responsable de resguardar, registrar y controlar el patrimonio del Instituto, asignado a las Unidades Administrativas.

Correlativo a lo anterior, el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración y Finanzas, establece como Responsabilidad de la Dirección presidir los Comités de Adquisiciones y Servicios y el de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y ***Enajenaciones*** del Instituto para dar cumplimiento a la normatividad establecida en la materia.

En virtud de lo anterior, se tiene que, en el caso concreto, se dio cabal cumplimiento con el requisito de turnar la solicitud de información a las áreas competentes que pueden poseer, generar y/o administrar la información requerida, conforme el procedimiento para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual es el siguiente:

* Las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados deben garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona puede ejercer el derecho de acceso a la información; por lo que, son las responsables de hacer las notificaciones correspondientes, además de llevar a cabo de todas las gestiones necesarias para facilitar el acceso de la información;
* Los Sujetos Obligados podrán requerirle a los Solicitantes, que complementen, corrijan o amplíen su solicitud de información, cuando resulten los datos proporcionados insuficientes, incorrectos, incompletos o erróneos; solicitar dicha aclaración, interrumpirá el plazo para dar respuesta y comenzará a computarse el día siguiente al desahogo de esta;
* Las respuestas a los requerimientos informativos deberán notificarse al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder **quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de ésta.** Excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse por siete días hábiles más, cuando existan razones fundadas y motivadas, a través del Comité de Transparencia;
* **Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, funciones y atribuciones, para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la documentación solicitada, con el fin de que proporcionen las expresiones documentales que se encuentren en sus archivos o que estén constreñidos a elaborar;**
* El acceso se dará en la modalidad de entrega y en su caso, de envío elegido por el solicitante, cuando no pueda entregarse en dicha modalidad, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otras; por lo cual, deberá fundamentar y motivar la necesidad de modificar el medio de entrega, y
* Las Unidades de Transparencia, tendrán disponible la información requerida durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles; por lo que, una vez transcurrida dicha temporalidad, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán de ser el caso, a la destrucción del material.

En virtud de lo anterior, se tiene que, **el procedimiento de búsqueda de la información se tiene por atendido.**

Ahora bien, cabe reiterar que la parte **Recurrente** solicitó información relacionada con la enajenación de bienes muebles de este Instituto, relacionada con el procedimiento de adjudicación directa derivada de la partida desierta de la subasta pública número INFOEM/DGAF/PAE-001/2024 referente al “Parque vehicular”, y que si bien entregó información que atiende los puntos relativos a los precios y fichas de depósito; también lo es que, clasificó como información confidencial el nombre de las personas a las que se adjudicaron los vehículos.

En este sentido, a efecto de analizar la naturaleza jurídica de la información pública solicitada, es oportuno referir que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 56, 62 y 64 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, son atribuciones del Comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones las siguientes:

*“****Artículo 24****.- El comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones tendrá las funciones siguientes:*

*I. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de licitación pública, tratándose de adquisición de inmuebles y arrendamientos.*

*II. Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente, tratándose de adquisición de inmuebles y arrendamientos.*

*III. Emitir los dictámenes de adjudicación, tratándose de adquisiciones de inmuebles y arrendamientos.*

***IV. Participar en los procedimientos de subasta pública, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo de adjudicación****.*

*V. Las demás que establezca el reglamento de esta Ley.*

***“Artículo 56.-*** *En el* ***procedimiento de subasta pública*** *de bienes muebles e inmuebles deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes.*

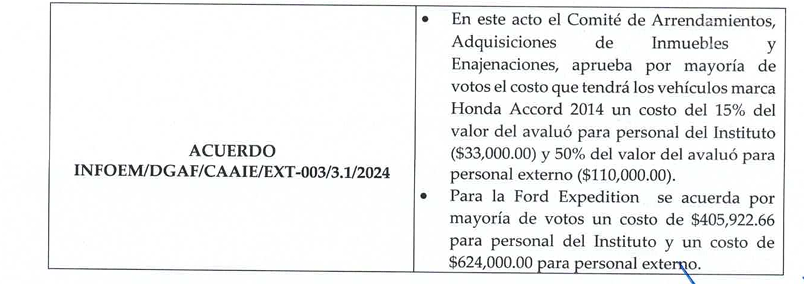
*Toda persona que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la subasta pública tendrá derecho a presentar posturas. La Oficialía Mayor, las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos* ***proporcionarán a los interesados igual acceso a la información relacionada con la subasta***.

*Artículo 62.- La Oficialía Mayor, las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos procederán a declarar* ***desierta la subasta pública, cuando no reciban propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases****.*

***Artículo 64****.- La Oficialía Mayor, las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos* ***podrán enajenar bienes mediante adjudicación directa*** *en términos del reglamento de esta Ley,* ***cuando se hubiere declarado desierto un procedimiento de subasta pública****.*

Es así que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos previamente trascritos, se tiene que, una vez que se declaró desierta la subasta pública número INFOEM/DGAF/PAE-001/2024 referente al “Parque vehicular” el **Sujeto Obligado** procedió a la enajenación de los bienes mediante adjudicación directa.

En este orden de ideas, a efecto de llevarse a cabo la adjudicación directa de los vehículos, el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en el Acta de la Sesión Extraordinaria número INFOEM/DGAF/CAAIE/EXT-006/2024, mediante acuerdo INFOEM/DGAF/CAAIE/EXT-003/3.1/2024 aprobó el costo que tendrían los vehículos de los que se solicita información.



Por lo que, una vez aprobados los costos que tendrían los vehículos y substanciado el procedimiento de enajenación de cuatro vehículos que en su momento formaron parte del parque vehicular del INFOEM, el veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, el Director General de Administración y Finanzas y Presidente del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones emitió el fallo del procedimiento administrativo de enajenación de bienes mediante adjudicación directa número INFOEM/AD-001/2004.

Documento que fue remitido en respuesta a la solicitud de información, siendo este, el documento idóneo para atender el punto relativo al nombre de las personas a las que se adjudicaron los multicitados vehículos; no obstante, el **Sujeto Obligado** clasificó el nombre de los postores a los que se adjudicaron los bienes como información confidencial.

Por consiguiente, es preciso indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, **ante la negativa de acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que encuentra en alguna de las excepciones establecidas en la normatividad aplicable.**

En ese sentido, según Trujillo, Humberto (2019), en el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (p. 201), **la negativa de acceso a la información** ocurre cuando de manera fundada y motivada, una autoridad la niega o la limita, por alguna de las siguientes razones:

* **La inexistencia de la información (p. 171):** Sucede cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos públicos o clasificados de los entes sujetos a las Leyes de Transparencia.
* **La incompetencia del Sujeto Obligado (p. 171):** Ocurre cuando el Sujeto Obligado carece de atribuciones para poseer la información peticionada.
* **La clasificación de la información (p. 70):** Es el proceso o conjunto de acciones que realizan los sujetos obligados para establecer que determinada información se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la legislación en materia de transparencia.

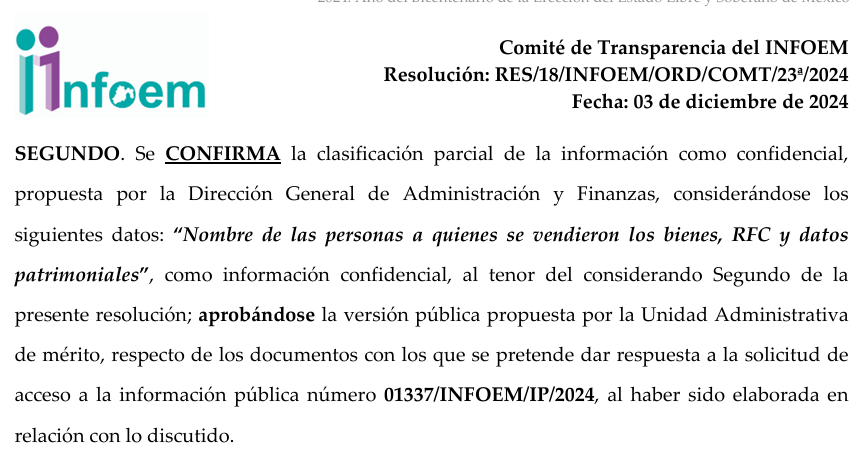
En ese orden de ideas y en atención a lo anterior, es de señalar que las excepciones al derecho de acceso a la información, consisten en que la documentación sea inexistente, **se encuentre clasificada**, o bien, el Sujeto Obligado sea incompetente para contar con esta; esto es, la negativa de acceso a la información, recae cuando la documentación no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, o bien exista, pero no pueda proporcionarse por contener datos **confidenciales o reservados.**

Así, en los artículos 122, 128 y 130 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se prevé que **la clasificación** es el proceso mediante el cual los sujetos obligados determinan que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Además, que dichos entes deberán aplicar de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información, por lo que, tendrán que acreditar la procedencia.

Por lo cual, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, **el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión;** además, deberá motivar la confirmación de dicha situación, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que en el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Por su parte, según Bonifaz, Leticia (2016), en la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Comentada” (p. 342), la **clasificación de la información**, ocurre cuando la autoridad niega el acceso a esta, por ser confidencial o reservada, para lo cual, los sujetos obligados, deberán realizar el proceso de clasificación, a la luz de los principios y disposiciones establecidas en las Leyes de Transparencia, fundando y motivando, **de manera adecuada la negativa de información.**

Conforme a lo anterior, se negó el acceso a la información peticionada por la parte **Recurrente**, al considerar que estaba clasificada; tan es así, que mediante Resolución: RES/18/INFOEM/ORD/COMT/23°/2024 emitida por Comité de Transparencia, celebrada el tres de diciembre de dos mil veinticuatro, donde confirmó la clasificación como confidencial de la información concerniente al nombre de las personas a quienes se vendieron los bienes, tal como se aprecia en el resolutivo SEGUNDO de la referida resolución, a saber:



En ese sentido, conforme al artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas –Lineamientos Generales-, los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o expedientes; por lo que, la clasificación de información se llevará a cabo mediante un **análisis caso por caso.**

Además, el artículo 131 de la Ley referida, así como el Quinto de los Lineamientos Generales, establecen que los sujetos obligados **deberán fundar y motivar** debidamente la clasificación de la información.

Al respecto, el Octavo de los Lineamientos Generales, precisa lo siguiente:

* **Para fundar la clasificación** de la información se deberán señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley aplicable;
* **Para motivar la clasificación** se deberán indicar las razones y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada; la cual, en el caso de que se trate de información reservada, la motivación, deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de un determinado plazo de reserva.

Lo anterior, toma sustento en la fracción VII, del artículo 1.8, del Código Administrativo del Estado de México, que establece que todo acto administrativo, debe estar fundado y motivado, esto es, que contenga con precisión, los preceptos legales aplicables, las circunstancias generales o especiales, razones particulares y causas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del mismo; asimismo, la Tesis aislada número I. 4o. P. 56 P, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, (p. 450), que establece lo siguiente:

***“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE.*** *La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.”*

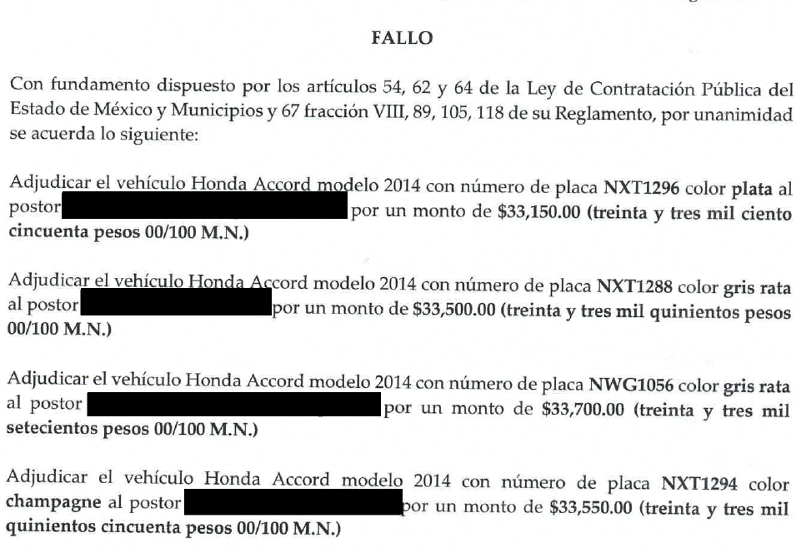
Conforme a lo anterior, se advierte lo siguiente:

* **Fundamentación:** Obligación de la autoridad que emite un acto, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye para la determinación tomada.
* **Motivación:** Razonamientos lógico-jurídicos sobre porque se consideró en el caso en concreto, que se ajusta a la hipótesis normativa.

En este sentido, respecto al nombre de las personas a quienes se vendieron los bienes, determinó que se considera su confidencialidad bajo la premisa de que la adquisición que realizaron lo fue mediante recursos económicos propios, circunstancia que deja patente de un bien adquirido desde una posición de la vida privada de la persona y como una decisión de índole patrimonial que en determinado momento llevaron a cabo.

Por lo anterior, es importante precisar que si bien, los bienes se adquirieron con recursos económicos propios; también lo es, que el costo aprobado para el procedimiento de adjudicación fue únicamente del 15% del valor del avaluó, **para el personal del Instituto** ($33,000.00) y del 50% del valor del avaluó para el **personal externo** ($110,000.00); es decir que, al no ser cubierto el total del valor del avaluó del vehículo, además de implicar un detrimento al patrimonio del Instituto, los postores a los que se adjudicaron los vehículos resultaron beneficiados.

Ahora bien, tomando como referencia las posturas presentadas, el fallo y de las fichas de depósito remitidas en respuesta se advierte que los cuatro vehículos se adjudicaron con un costo del 15% del avaluó, tal como se advierte en la siguiente imagen:



En este sentido, es oportuno reiterar que el motivo de inconformidad de la parte **Recurrente** derivó de la clasificación del nombre de la persona a la que se adjudicaron los vehículos, información que a su consideración es de carácter público.

Al respecto, se considera que el nombre se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre *per se* es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, **se considera un dato personal.**

Ante tales circunstancias, se desprende que, en el caso concreto, sobreviene una **colisión de derechos fundamentales,** esto es, por una parte, se tiene el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente** para conocer el nombre de las personas a las cuales se adjudicaron los vehículos, y por la otra, el derecho a la protección de los nombres de aquellas que obtuvieron los vehículos una vez determinado el costo, lo cual implica dar a conocer datos personales confidenciales consistentes, en el nombre de personas físicas y este vincularlo con los bienes muebles propiedad del Sujeto Obligado cuya enajenación fue mediante el procedimiento de adjudicación directa.

Sobre el particular, debe señalarse que, en un sistema jurídico racional, el contenido de ciertos derechos fundamentales no es absoluto y la colisión entre derechos fundamentales debe resolverse mediante una ponderación que determine el derecho que ha de prevalecer en el caso concretó, y no apelando a reglas de prioridad entre normas.

Por cuanto hace a la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la vida privada, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido la **necesidad de resolver el conflicto apuntado mediante el ejercicio de ponderación; además, que el interés público que tenga cierta información, será concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad o la vida privada, en donde este derecho debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto,** tal y como se desprende de la tesis 1a. XLIII/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 928, de marzo de 2010, Novena Época, materia constitucional.

En ese mismo sentido y atendiendo a la naturaleza del derecho a la protección de datos personales, por analogía, este debe ceder cuando exista un interés público mayor de acuerdo a las circunstancias del caso.

Señalado lo anterior, resulta necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados que convergen en la controversia que se dirime; para lo cual, el artículo 184 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé:

***“Artículo 184****. El Instituto, al resolver el recurso de revisión y tratándose de información clasificada como confidencial, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.*

*Para estos efectos, se entenderá por:*

***I. Idoneidad****: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;*

***II. Necesidad:*** *La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información para satisfacer el interés público; y*

***III. Proporcionalidad:*** *El equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.”*

En ese orden de ideas, resulta procedente analizar cada uno de los elementos referidos, bajo las consideraciones que se verterán a continuación.

**a) Idoneidad**. En cuanto al primer elemento de ponderación, se debe elegir el principio que será adoptado como preferente, buscando su justificación a partir de la valoración adecuada para satisfacer el fin constitucionalmente válido o pretendido.

Al respecto, se considera que debe prevalecer el derecho de acceso a la información pública de la parte **Recurrente**, por encima del derecho a la protección del dato personal de los postores a los que se adjudicaron los bienes muebles, toda vez que en el presente caso, se advierte un aprovechamiento de bienes del **Sujeto Obligado**, o bien, de recursos públicos, pues en el presente caso, se trata de vehículos que en su momento integraron el inventario de bienes muebles del Instituto y que fueron adjudicados únicamente por un costo del 15% del valor de su avaluó, obteniendo el beneficio de dicho precio exclusivamente por tener la condición de servidores públicos del Sujeto Obligado.

Ahora bien, tomando como referencia que, en el Acta del Comité de Adquisiciones referida en antecedentes, se aprobó como preció el 15% del valor del avaluó, para el personal del Instituto; que corresponde con las cantidades determinadas en el fallo y con las fichas de depósito y transferencias entregadas en respuesta; por lo que, se infiere que las adjudicaciones se realizaron a servidores públicos de este Instituto.

En este sentido, al tratarse de servidores públicos las personas a las que se adjudicaron los bienes, es importante referir que están sujetos a un régimen de protección menor respecto a los datos personales, ya que los mismos se encuentran expuestos al escrutinio público, cuando estos datos se relacionan con la función pública que desempeñan, aunado a que en el caso particular se les otorgó precisamente un precio preferencial por su calidad de servidores públicos del Sujeto Obligado.

Por lo que, clasificar el nombre de las personas a quienes mediate el procedimiento de adjudicación directa se enajenaron los vehículos con un precio preferencial por cumplir con una cualidad especial, va en contra del derecho de acceso a la información pública, pues se restringe el derecho de la parte **Recurrente** a conocer el resultado derivado del procedimiento de adjudicación, el cual constituye entre otras cosas un mecanismo de trasparencia, rendición de cuentas y principalmente la verificación de que se cumplió con la condición establecida al momento de fijar los costos en el Acta emitida por el Comité.

Es bajo tales consideraciones, que se determina que la publicidad del nombre de las personas a las que se adjudicaron los bienes muebles motivo de análisis del presente asunto debe prevalecer frente a la protección del nombre de los postores ganadores, pues transparenta la gestión pública y la correcta actuación del Sujeto Obligado, pues dicha situación se acreditaría al revelar la determinación adoptada respecto a la enajenación de bienes que en su momento formaron parte del patrimonio de este Instituto, más aún cuando se adquirieron a un precio preferencial, por lo que a efecto de verificar que efectivamente se trató de servidores públicos del Sujeto Obligado y se cumplió con la condición señalada en el Acta de la Sesión Extraordinaria número INFOEM/DGAF/CAAIE/EXT-006/2024 del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Instituto es que en este caso necesario y proporcional dar a conocer el nombre de los mismos.

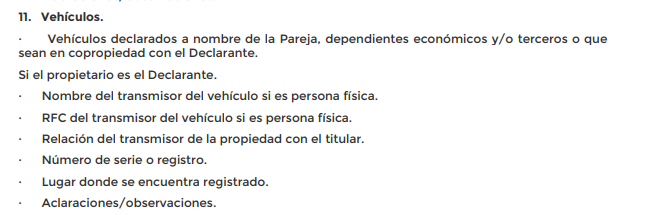
**b) Necesidad.** El juicio o principio de necesidad, tienen como finalidad acreditar que no existan medios alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados,o bien, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental.

En este sentido, el fallo del procedimiento administrativo de enajenación de bienes mediante adjudicación directa número INFOEM/AD-001/2024 el que fue clasificada la información requerida por el particular relativa al nombre de los postores a los que se adjudicaron los vehículos, no puede sustituirse por otro, en principio de cuentas porque contiene el resultado o la determinación derivada de dicho procedimiento y en segundo lugar es el medio para verificar que se cumplió con la condición establecida; es decir, el 15% del costo del avaluó para servidores públicos del Instituto.

Por consiguiente, acceder a los nombres de las personas a las que se adjudicaron los bienes, es estrictamente necesario a efecto transparentar la gestión pública y la correcta actuación del Sujeto Obligado, descartando un posible conflicto de intereses.

**c) Estricta proporcionalidad**. En el presente caso se considera, que la vida privada de las personas a las que se les adjudicó el bien no se ve afectada con la entrega de sus nombres, por lo que a través de esta resolución se ordena la entrega la entrega del documento en el que consten y se dejen visibles los nombres de los servidores públicos beneficiados con la adjudicación de los bienes muebles, en su momento propiedad del **Sujeto Obligado,** pues resulta ser la medida idónea y necesaria para garantizar el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente,** siendo la subasta y la adjudicación de bienes un mecanismo de transparencia y el cual se concreta al conocer el nombre de los postores a los que se adjudicaron los bienes motivo de la solicitud que ahora se analiza; toda vez que, publicar dicha información es el medio para conocer si la adjudicación con el preció del 15 % del valor del avaluó de los vehículos se hizo a servidores públicos, tal como se aprobó por el Comité de Adquisiciones para tal efecto.

Ahora bien, sin contrariar lo anterior, es de reconocer que si bien, aun y cuando en ese supuesto podría encuadrar en información confidencial, pues al hacer público el nombre también se daría a conocer su información patrimonial, también lo es que, al tratarse de servidores públicos del Instituto, que además de haber adquirido el bien a un precio preferencial por su condición, el legislador estableció que la información patrimonial, deben registrarse en la declaración de situación patrimonial, lo que se sustenta en el hecho de que los bienes adquiridos en este caso los vehículos por un servidor público del propio Sujeto Obligado, constituye información que en su momento deberá publicarse; toda vez que, se trata de información que será visible en las declaraciones patrimoniales tal como lo señala el CAPÍTULO CUARTO SOBRE LA TRANSPARENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS DECLARACIONES PATRIMONIAL Y DE INTERESES, NUMERAL DECIMONOVENO DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL FORMATO DE DECLARACIONES: DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES consultadas en : <https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/tramites_servicios/declaracion/Instructivo_llenado_DeclaraNET.pdf> , en las que se establece que respecto a los la información patrimonial relacionada con vehículos, únicamente NO será de acceso público, la siguiente:



Por tanto, la circunstancia que implica mayor beneficio y menos perjuicios es entregar los nombres solicitados, testando, en su caso, el nombre de participantes que no resultaron beneficiados o que no son servidores públicos del Instituto, con el fin que el ahora recurrente pueda constatar que se cumplieron al momento de la adjudicación con los términos señalados en el Acta de la Sesión Extraordinaria número INFOEM/DGAF/CAAIE/EXT-006/2024 del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Instituto.

Por tales circunstancias, se considera que debe prevalecer publicidad de la información solicitada, frente a la protección del nombre de las personas servidoras públicas del Instituto a las que se adjudicó el bien, pues este no se ve disminuido.

Por todo lo expuesto, el nombre de los servidores públicos del sujeto obligado ganadores en el procedimiento de adjudicación directa de los vehículos, NO actualizan la causal de clasificación prevista en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por consiguiente, para tener por satisfecho el Derecho de acceso de la persona solicitante, se estima dable ordenar la entrega del Fallo del Procedimiento Administrativo de Enajenación de Bienes mediante Adjudicación Directa número INFOEM/AD-001/2024, remitido en respuesta, en versión pública correcta.

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen fundados, siendo procedente *Modificar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Quinto. Versión Pública.** Finalmente, debe señalarse que de ser el caso en que los documentos que vayan a ser entregados para dar cumplimiento a la presente resolución, contengan datos que deban ser clasificados; esto es, el nombre de participantes en el procedimiento de adjudicación que no hayan resultado ganadores o no sean servidores públicos del Instituto, el **Sujeto Obligado** deberá hacer la elaboración de la versión pública de tales documentos a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte **Recurrente** sin menoscabo al derecho a la protección de los datos personales de terceros.

Para efectos de la elaboración de la versión pública se deberá observar lo dispuesto por los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132, 137 y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***IX. Datos personales****: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*…*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I****. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*…*

***Artículo 137.*** *Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.*

***…***

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;”*

Igualmente, lo establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Cabe señalar que la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Respecto a las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado** a través de su Comité de Transparencia, los Lineamientos Quincuagésimo, Quincuagésimo primero, Quincuagésimo segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas señalan lo siguiente:

***“Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

***I.*** *El número de sesión y fecha;*

***II****. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

***III****. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

***IV****. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

***V****. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:*

***I.*** *Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*

***II****. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial****;***

***III.*** *El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*

***IV.*** *El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

*En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.*

***Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso especifico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I.*** *Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

***II.*** *Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

***III.*** *Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.”*

Asimismo, deberá observar los Lineamientos Quincuagésimo cuarto, Quincuagésimo quinto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.*

***...***

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **fundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **07559/INFOEM/IP/RR/2024**; por lo que, en términos del **Considerando** **Cuarto** de esta resolución, se **Modifica** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado,** en términos de los **Considerandos** **Cuarto** y **Quinto** de esta resolución, haga entrega, vía **SAIMEX,** de ser procedente en versión pública, lo siguiente:

1. Fallo del Procedimiento Administrativo de Enajenación de Bienes mediante Adjudicación Directa número INFOEM/AD-001/2024, remitido en respuesta.

*Para la entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen, que se deberá poner a disposición de la parte* ***Recurrente****.*

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Cuarto. Notifíquese, vía SAIMEX** a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnar la presente resolución vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.